

MEMORIA

Seminario: RECIENTES TRANSFORMACIONES AGRARIAS EN BOLIVIA

Espacio de análisis y discusión para la generación de diálogo informado sobre las causas de las transformaciones agrarias y sus consecuencias



MEMORIA

Seminario:
**RECIENTES
TRANSFORMACIONES
AGRARIAS EN BOLIVIA**

La Paz, 4 y 5 de noviembre de 2014

Fundación TIERRA cuenta con el apoyo institucional de:

Pan Para el Mundo - Servicio Protestante para el Desarrollo (PPM-SPD), Organización Intereclesiástica para la Cooperación al Desarrollo (ICCO) y la Coalición Internacional para el acceso a la Tierra (ILC)

Este trabajo se llevó a cabo con la ayuda de una subvención del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) en el marco del proyecto “Seguridad alimentaria, tierra y territorio en Bolivia”.

Memoria Seminario Recientes Transformaciones Agrarias en Bolivia

Tierra. La Paz: Fundación TIERRA, 2015.

DL: 4-1-2237-15

ISBN: 978-99974-821-5-0

TRANSFORMACIONES AGRARIAS / EXTRACTIVISMO / CAPITALISMO / DESARROLLO /
NEOLIBERALISMO / CAMPESINOS / INDÍGENAS / INDUSTRIALIZACIÓN / REFORMA AGRARIA
/ COMUNITARIA / SANEAMIENTO DE TIERRAS / PROPIEDAD / AGRONEGOCIO / FRONTERA
AGRÍCOLA / EXPANSIÓN / ALIMENTOS / SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA /
AGROQUÍMICOS / MUJERES / BOLIVIA

© TIERRA, julio de 2015

Editor: Fundación TIERRA

Calle Hermanos Manchego N° 2566

La Paz – Bolivia

Tel: (591) 2 243 2263

Fax: (591) 2 211 1216

Email: tierra@ftierra.org;

Sitio web: www.ftierra.org

Edición: Andrés Martínez Crespo

Ilustración de tapa: Gonzalo Llanos

Diseño y diagramación: Chanel Colque C.

Impresión: Imprenta Gráfica Claros

Impreso en Bolivia

Contenido

Presentación	5
Resumen.....	7
Conferencia magistral:	
El extractivismo agrario en tiempos de crisis del capitalismo.....	17
<i>Profesor Henry Veltmeyer, Universidad Autónoma de Zacatecas y Saint Mary's University (Canadá).</i>	
PANEL 1: PRINCIPALES CAMBIOS AGRARIOS EN BOLIVIA.....	29
a. El agro en el modelo de desarrollo boliviano	31
<i>Carlos Toranzo, economista y politólogo</i>	
b. El campesino minifundista después de 60 años de reforma agraria	40
<i>José Núñez del Prado, Docente Investigador y Coordinador del Área de Desarrollo Rural del CIDES/UMSA</i>	
c. Luchas políticas y legales por la tierra en Bolivia.....	49
<i>Alejandro Almaraz, Especialista en Derecho Agrario y Ex Viceministro de Tierras</i>	
PANEL 2: LA AGENDA DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA AGRÍCOLA.....	59
a. Gestión pública en la administración de la tierra: estado de situación de la problemática boliviana de tierras	61
<i>Giovanna Mallea, Viceministerio de Tierras</i>	
b. La ampliación de la frontera agrícola en el marco de la Agenda Patriótica 2025.....	73
<i>Enrique Castañón Ballivián, Investigador de Fundación TIERRA</i>	
c. Presiones de la expansión comercial de tierras sobre los territorios indígenas de tierras bajas	85
<i>Alicia Tejada, Investigadora en temas indígenas y forestales</i>	
PANEL 3: SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA.....	91
a. La política nacional de seguridad con soberanía alimentaria.....	93
<i>Luis Baudoin, Viceministro de Comercio Interno y Exportaciones</i>	
b. La cuestión de quién suministra alimentos en Bolivia.....	101
<i>Miguel Urioste, investigador de Fundación TIERRA</i>	
c. La situación agroalimentaria: balance y valoración del sistema alimentario boliviano	106
<i>Julio Prudencio, Especialista en seguridad alimentaria</i>	
PANEL 4: EXCLUSIÓN SOCIAL EN EL SECTOR RURAL Y AGRARIO	119
a. La situación de los pueblos indígenas de tierras bajas y Tierras Comunitarias de Origen	121
<i>Alcides Vadillo, Director Regional Santa Cruz - Fundación TIERRA</i>	
b. Procesos de descampesinización y diferenciación campesina	127
<i>Adalberto Kopp, Investigador del CESA</i>	
c. Acceso a la tierra y exclusión de las mujeres rurales	136
<i>Carmen Sánchez, Investigadora, especialista en género</i>	

**COLOQUIO: ¿QUÉ TIPO DE AGRICULTURA SE REQUIERE PARA
ALCANZAR LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA?..... 147**

Carlos Toranzo, economista y politólogo 149

Rodolfo Machaca, Secretario General CSUTCB..... 155

Humberto Gómez, Director Ejecutivo FAN..... 160

Andrés Gómez Vela, moderador

**MESA DE INVESTIGADORES:
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS Y PUBLICACIONES..... 179**

¿Cuándo y por qué murió la Reforma Agraria?..... 181

Cambios agrarios en el complejo sojero: la concentración, control y exclusión productiva. 182

Gobernanza responsable de la tenencia de la tierra..... 183

Propuestas para políticas públicas..... 184

Presentación

Un fenómeno de nuestros tiempos es que vivimos en un sistema capitalista global que depende cada vez de la extracción de recursos naturales. Son tiempos de intensificación del uso de capital antes que economías de explotación del trabajo. Esto se puede constatar en el aumento de los flujos de capital desde los países ricos y emergentes como China hacia países pobres como Bolivia. Son inversiones de capital dedicadas a intensificar la explotación de tierra, recursos del subsuelo, agua, bosques y otros. Afectan de muchas maneras y una de mayor visibilidad tiene lugar a través de la transformación del agro boliviano.

Algunos de los cambios agrarios son bien conocidos pero pocas veces nos hemos preocupado por entender las mismas dentro del escenario global reciente. El agro-extractivismo dirigido por capitales transnacionales, la mercantilización de recursos naturales o la extranjerización de la tierra no son temas nuevos. Son realidades que han originado movimientos políticos contestatarios y proyectos políticos que hoy se traducen, por ejemplo, en un gobierno boliviano atrapado en su propio dilema, entre la defensa de principios y postulados anti-capitalistas y la promoción de una economía extractivista utilitaria al sistema capitalista que se condena. Son contradicciones estructurales fáciles de condenar pero complejas de entender. Las posturas políticas se exacerban y al parecer no hay alternativas consistentes frente a la destrucción de la naturaleza.

Bajo este marco introductorio, a finales de 2014 hemos organizado el seminario “Recientes transformaciones agrarias en Bolivia”¹, a modo de un espacio de análisis y discusión para la generación de diálogo informado sobre las causas de las transformaciones agrarias y sus consecuencias. De manera sintética podemos señalar que hemos abordado en cuatro paneles centrales: Principales cambios agrarios en Bolivia, La agenda de ampliación de la frontera agrícola, Seguridad y soberanía alimentaria y Exclusión social en el sector rural y agrario. En estos espacios han participado investigadores, activistas, hacedores de políticas públicas, representantes de movimientos sociales y otros, quienes han hecho conocer sus resultados de investigación, análisis y reflexiones. También se han presentado trabajos en curso en una “mesa investigadores” y para el cierre del evento, se ha instalado el coloquio denominado “¿qué tipo de agricultura se requiere para alcanzar la seguridad y soberanía alimentaria?”. Esta memoria recoge todos los contenidos expuestos y los temas más destacados de las rondas de preguntas y respuestas. Ha sido resultado de una minuciosa y cuidada sistematización a cargo de Andrés Martínez.

1 El seminario “Recientes transformaciones agrarias en Bolivia” se realizó el 4 y 5 de noviembre de 2014 en la ciudad de La Paz con la participación expositores nacionales e internaciones. Responde a una de las actividades regulares de la Fundación TIERRA de promover espacios públicos de debate y análisis sobre los temas agrarios y rurales.

En términos metodológicos, este seminario destaca por el esfuerzo y cuidado que hemos tenido por traer a discusión temas y planteamientos que no sean reiterativos ni 'memorísticos'. Para ello hemos trabajado antes y después del evento con la mayoría de los expositores para preparar preguntas y contenidos acordes a la nota conceptual del seminario. Muchos de ellos han preparado ponencias escritas enviadas con anticipación y que luego han sido utilizadas para delinear los contenidos centrales de esta memoria. También hemos puesto a disposición del público literatura reciente sobre los temas abordados y que pueden ser consultados en nuestro sitio web www.ftierra.org

Finalmente, queremos agradecer a quienes han hecho posible este trabajo. A los expositores nacionales e internacionales, a IDRC en la persona de Álvaro Paz, a Pan Para el Mundo, ICCO cooperación e ILC. Con todos compartimos el compromiso de trabajar a favor de los excluidos y particularmente del sector más pobre de nuestras regiones rurales. Nuestro agradecimiento al público asistente a esta convocatoria.

Gonzalo Colque
Director de Fundación TIERRA

RESUMEN

RESUMEN

El efecto de la agroindustria y los capitales multinacionales en el área rural boliviana, y la urgencia de que se apoye el desarrollo productivo campesino con políticas plurales y democráticas son dos de los asuntos que más se abordaron durante los dos días de seminario.

Qué se dijo en el seminario

Proyecto dominante

Varias de las exposiciones del seminario coincidieron en la descripción del sistema económico global en el que se encuadra la realidad agraria nacional. En la ponencia inaugural, el estudioso Henry Veltmeyer aporta la mayor cantidad de información al respecto. En sus palabras, está vigente un tipo de capitalismo similar al del siglo XIX, sustentado en la extracción de recursos naturales, más que en la explotación del trabajo. En una línea similar, el investigador Carlos Toranzo plantea que se trata de una “fase adicional” del capitalismo en la que se verifica una “intensificación del capital con respecto al trabajo humano”.

Según Veltmeyer, esa “intensificación” se traduce en la llegada de enormes flujos de capital sobre la región. Así, Sudamérica pasó de recibir el 12% de la inversión mundial en minería en 1990 a captar el 40% en la actualidad. El ejemplo minero no es casual; los conocidos fenómenos aparejados a la explotación minera y de hidrocarburos, resumidos en la célebre “maldición de los recursos”, se extienden al ámbito agrario.

Entre las consecuencias de ello están el aumento del carácter de enclave de la economía y su “re primarización”, con beneficios exiguos para los países, y elevados costos sociales, medioambientales, económicos y políticos; estos últimos, especialmente altos para los denominados gobiernos postneoliberales, pues su prédica progresista va a contrapelo de su decidida adscripción al extractivismo (y a su versión rural denominada “agroextractivismo”).

Veltmeyer describe el panorama de un área rural al servicio del agroextractivismo: campea el monocultivo para la producción de materias primas comerciables en mercados internacionales (*commodities*), y las tierras son trabajadas por “agricultores a contrato”, pues los inversionistas no asumen el control directo del proceso de producción, con lo que eluden los costos de reproducción de la fuerza de trabajo. También hay acaparamiento de tierras y surgen movimientos contestatarios en la sociedad, que contrastan con la coincidencia de intereses entre los gobiernos y el capital global.

De esta afinidad entre el Estado y el capital transnacional se desprenden múltiples ramificaciones, descritas en casi todos los tramos del seminario.

Para Miguel Urioste, investigador de Fundación TIERRA, un elemento central de la constitución de este nuevo capitalismo y de su expansión globalizada en el ámbito rural es el agronegocio como una nueva fase del régimen agrario corporativo a nivel planetario en el que los Estados se someten a los capitales transnacionales

y abandonan la agricultura familiar y campesina a su propia suerte.. Enrique Castañón, también experto de Fundación TIERRA, remacha: el agronegocio es “el proyecto agrario del neoliberalismo global”. Ambos coinciden en que su influjo sobre la región es tan fuerte que se le pliegan gobiernos de toda índole, incluido el boliviano.

La principal muestra, coincide la mayoría, es el apoyo del gobierno a la agroindustria oriental, identificada como el instrumento del capital multinacional para la producción agrícola de *commodities*. Los expositores citan diversas muestras de ese respaldo: la postergación del control de la función económico social (FES), el anuncio de ampliación de la frontera agrícola, la tolerancia al empleo de transgénicos, la subvención de combustibles...

Es un respaldo pleno de connotaciones políticas e históricas. Coinciden Toranzo, Alejandro Almaraz y Castañón que este gobierno no solo retoma el proyecto desarrollista de capitalismo de Estado impulsado por el nacionalismo revolucionario, sino también la construcción de una burguesía agropecuaria en el oriente, proyecto anhelado desde hace medio siglo por sucesivos gobiernos. “[Actualmente] está reinstalado en el poder el interés dominante de aquel sector empresarial de evidentes rasgos oligárquicos y latifundiaros que se creó con la ilusión del capitalismo progresista en la Reforma Agraria del 53”, afirma Almaraz, exviceministro de Tierras del actual gobierno.

Castañón ensaya la hipótesis de que el instrumento de consolidación de esa burguesía oriental sería la Agenda Patriótica 2025, una amplia declaración de objetivos que el gobierno formuló hace un par de años y que busca, entre otras cosas, la “Soberanía Productiva con diversificación (...) sin la Dictadura del Mercado Capitalista”. Paradójicamente, la ejecución de la Agenda 2025, según el investigador, implicaría la ampliación de la frontera agrícola para la monoproducción, principalmente en Santa Cruz, lo que pondrá en riesgo áreas forestales y TCO, sin afectar a latifundios ociosos (el acuerdo de la reciente Cumbre Agropecuaria Nacional de suspender por cinco años la verificación de la FES lo confirma). Esta apuesta, beneficiaría a una minoría empresarial de productores, vinculada con inversionistas internacionales cuyas ganancias serán cuantiosas, mientras que los excedentes capturados por el Estado serán ínfimos.

Esta preferencia por la agroindustria, según Toranzo, se remonta al proyecto de desarrollo del MNR, que buscaba la formación de una burguesía productora de alimentos en oriente y una burguesía industrial en occidente. En este esquema, no hubo políticas que alentaran el desarrollo del campesino, pues se lo veía simplemente como futura mano de obra para la industrialización urbana. “Es por esta razón que el modelo del 52 creó un Estado anticampesino” y algo parecido ocurre ahora. Toranzo va más allá: el actual modelo también es antiindígena.

La situación indígena

Hasta 2014, el Estado adjudicó 23,7 millones de hectáreas a tierras comunitarias de origen (TCO), un tercio de la superficie nacional saneada, según Giovanna Mallea, del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Pese a esa magnitud, el apoyo estatal para la gestión territorial de las TCO es “un tema pendiente”, admite la autoridad. “Muchas de las superficies consolidadas a las TCO están siendo arrendadas a extranjeros y empresarios, porque en nuestros territorios indígena originario

campesinos no hay las capacidades para promover su propio desarrollo”, añade.

El caso de la TCO Guarayos (Santa Cruz) es ilustrativo. No sólo se “desmanteló toda posibilidad de planificación” tras diez años de abandono estatal y pugnas políticas, en palabras de la investigadora Alicia Tejada, sino que además el Estado consolida derechos propietarios a particulares en sitios que tienen múltiples protecciones legales, mientras que hay indígenas que alquilan ilegalmente tierras a mineros, madereros e incluso campesinos, según el líder de la CSUTCB, Rodolfo Machaca.

Alcides Vadillo, investigador de Fundación TIERRA, atribuye estos fenómenos al poder del principal elemento de la producción de la tierra en la actualidad: el capital. “Es el capital el que decide qué se produce, dónde se produce, cómo se produce y para quién se produce”. Ello deriva en que indígenas y campesinos pierdan el control sobre su tierra y su producción “por el afán de vivir de unas rentas fundiarias”.

A esa amenaza, Vadillo añade una eventual reversión de TCO, sustentada en sus supuestas improductividad y demasía de superficie. Esta medida no sólo sería una violación de los derechos humanos y la Constitución, según el investigador, sino además, un “castigo” a visiones de vida y desarrollo diferentes. “La responsabilidad del Estado no es revertir un proceso de lucha de 30 años de estos pueblos, sino ver cómo apoyarlos en la gestión territorial indígena, que implica visiones de desarrollo que sean económica, ambiental, social y culturalmente pertinentes”.

Esta posibilidad, sin embargo, parece remota. Para Almaraz, “el proyecto indígena y campesino de redistribuir la tierra en función de la reapropiación comunitaria y territorial, para de esta manera sentar las bases de una reorganización económica (...) de alcances transformadores [y] globales en la sociedad boliviana, está derrotado”.

En esta pulsión entre el respeto de la visión comunitarista y la inclusión o la “asimilación” (según los términos de la Revolución del 52), se ha impuesto la última, apunta Castañón: “tenemos que ver claro y concreto, por ejemplo, el evidente apoyo electoral [al MAS]. Hay un imaginario hegemónico en Bolivia y es un imaginario desarrollista, nos guste o no. Es en función de esas posibilidades de la sociedad que el gobierno juega sus cartas”.

Sin embargo, la administración de Evo Morales consolidó la propiedad de gran parte de las TCO... hasta 2010, cuando “la redistribución se cortó en seco”, como apunta Almaraz. Toranzo completa la idea: “El MNR también dio tierras a los campesinos, pero no los ayudó a fortalecer sus actividades económicas, y acabó como un Estado anticampesino. Hoy existe poca o ninguna política oficial para mejorar la situación económica de los indígenas y, por supuesto, tampoco para el campesinado tradicional”.

La situación campesina

Solo el 2,6% del gasto público va directamente a la agricultura campesina, según Castañón. Para el investigador el “abandono sistemático del Estado neoliberal de la agricultura campesina ha empezado a ser revertido; sin embargo, lo hecho todavía es por demás insuficiente”.

Entre las medidas de apoyo al campesinado, están la entrega de semillas e insumos

“a cero tasas de interés” y el pago a productores con precios de entre 10 y 15% por encima de la cotización del mercado, informa el viceministro de Comercio Interno y Exportaciones, Luis Baudoin. La autoridad afirma que gracias a esa política, ejecutada por la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), el país ahora se autoabastece de todos los granos, salvo de trigo (aún hay 60% de déficit)

Rodolfo Machaca y un pequeño productor de Santa Cruz pusieron en duda la aplicación y eficacia de esas acciones: no hay compras preferenciales en el altiplano, salvo de quinua para exportación, y en oriente hay quejas de que las adquisiciones de Emapa no benefician a pequeños productores, y si así ocurre, la entidad pública demora su pago a los agricultores, generando incluso quiebras. Además, el provecho que percibe un campesino al recibir mayor importe por su cosecha se neutraliza debido a que Emapa solo le compra la mitad de su producción, por lo que aquel se ve forzado a vender el resto “a precio de gallina muerta”, precisamente a causa del subsidio al consumidor.

Este fenómeno retrata uno de los efectos negativos que ejerce en la producción campesina la política de estabilización de precios y control de la inflación, aplicada a través del subsidio al consumo de alimentos, la libre importación y el dólar barato. Varios de los expositores coinciden en esa crítica.

“La mercancía más barata en el país es el dólar. Gracias a ello se puede importar todo tipo de alimentos, y eso genera seguridad alimentaria para buena parte de la población”, plantea Toranzo, pero añade que esto no es sostenible en la medida en que la seguridad alimentaria es financiada por los precios extraordinarios, pero coyunturales, de las materias primas de exportación. Además —complementa Urioste— las importaciones amenazan a la soberanía alimentaria porque, junto con el subsidio al consumo, desincentivan especialmente la producción de alimentos provenientes de la agricultura de base campesina

Muestra de ello es cómo entre 2005 y 2014 la producción nacional de papa creció tan solo un promedio anual de 0,66%, mientras que la importación del tubérculo en el mismo período subió un promedio anual de 859,6%, según el investigador Julio Prudencio. En 2013, Bolivia compró casi 12 veces más cantidad de papa que en 2006: 23.732 toneladas métricas, por valor de \$us 1,7 millones. Algo similar ha ocurrido con las legumbres, hortalizas y frutas. En general, la cuantía de las importaciones se triplicó y su volumen creció en 120% en siete años.

Para Prudencio, este fenómeno se deriva del “nuevo modelo de desarrollo agroalimentario basado en las exportaciones” y practicado en el país por el sector agroindustrial, con apoyo de capital extranjero y la participación de pequeños productores campesinos de oriente; todos ellos, articulados por el Estado en el papel de facilitador del capital.

El investigador afirma que este modelo “prioriza e incentiva las exportaciones y los *commodities*, producidos con agroquímicos [en excesiva cantidad] y transgénicos, a costa de la deforestación y la ampliación de la frontera agrícola; y fortalece el agronegocio basado en una agroindustria productivista que pretende producir más alimentos de exportación. Eso provoca una disminución en la generación de los productos básicos de consumo y un incremento en las importaciones, lo

que agudiza la dependencia alimentaria del país (...) y disminuye la capacidad de autoabastecimiento”.

Prudencio añade otras consecuencias del modelo: la diferenciación económica entre campesinos, acorde con su forma de vinculación con el negocio agroindustrial y con el gobierno; y la modificación de los hábitos de consumo. Sobre lo último, Urioste cita una investigación de Fundación TIERRA que detectó la drástica caída del autoabastecimiento en poblaciones campesinas de diferentes regiones del país, y el reemplazo de la producción propia por alimentos de origen agroindustrial.

Con relación a la diferenciación campesina, Castañón la grafica así: sólo el 10% de los campesinos cruceños puede ingresar al negocio de la soya (ocupan sólo el 28% de la tierra cultivada), mientras que el resto rifa su mano de obra, u oscila entre la ciudad y el área rural.

Situaciones como la descrita han llevado a Urioste a proponer una nueva tipología que diferencie al “productor de subsistencia o campesino a medio tiempo”, del “pequeño agricultor familiar exitoso”, el “productor de *commodities*” y el “indígena de tierras bajas”. En los miembros del primer grupo es común la migración a centros urbanos en busca de un empleo para sobrevivir, lo que el investigador denomina como “descampesinización”, mientras que un fenómeno inverso, la “reagriculturización”, ocurre donde los campesinos encuentran “mayor potencial productivo en la especialización”.

El investigador Adalberto Kopp relativiza los conceptos mencionados: los campesinos tienen derecho a “trasladarse” de domicilio en pos de mejores condiciones de vida, debido en gran parte a la presión demográfica en ciertas zonas agrícolas, y ese fenómeno también incluye a productores exitosos que basculan entre el campo y la ciudad. Esta especie de “vida anfibia” entre dos ámbitos, en palabras del investigador José Núñez del Prado, sugiere que conceptualmente ya no es posible referirse a los dos ámbitos de manera dual, como espacios aislados ni con límites marcados, sino con vasos comunicantes de intercambio fluido: una “agrópolis rurbana”.

Rodolfo Machaca tiene una percepción diferente: hay conflictos incluso violentos debido a “residentes” que quieren apropiarse de la tierra de los mayores; los jóvenes que parten a la ciudad ya no vuelven, adictos al consumismo; y hasta los niños “ya quieren individualizarse” y piden videojuegos y computadoras. Ante eso, según el dirigente, el Estado debería dotar más tierras para evitar el abandono del campo y hacer transferencias financieras directas a las comunidades, entre otras medidas, para impulsar la agricultura comunitaria campesina, el único modelo que la CSUTCB halla viable y que debería reemplazar al modelo agroindustrial exportador.

Para Toranzo, es utópico pensar que la agricultura comunitaria se volverá dominante, dado el poder del agronegocio, aunque plantea que es imperativo que el Estado defina medidas que incentiven la producción de alimentos y no sólo de materias primas de exportación, es decir, las políticas públicas deberían democratizarse y también respaldar al campesino mediano y al tradicional. “Pienso en el campesino real que es urbano rural, y en la continuidad urbano rural, que no está premiada. Lo que está premiado es ser de la burguesía comercial, ser cooperativista, contrabandista, chutero o vendedor de ropa usada”.

En una línea similar, Urioste sugiere, entre otras cosas, que el desarrollo rural no sólo tenga un “enfoque sectorial agrícola, sino regional territorial”; que haya políticas diferenciadas para cada tipo de agricultor (de subsistencia, especializado o exportador de *commodities*, e indígenas); y que ya no se subsidie el consumo de alimentos, sino la producción de alimentos.

“Hay un potencial enorme para la agricultura familiar de base campesina, siempre y cuando haya políticas públicas consistentes que la promuevan”, afirma. Ahora, las políticas públicas “son insuficientes, contradictorias y están subordinadas al capital transnacional”.

Más allá de la perspectiva de género

La investigadora Carmen Sánchez se pregunta si los avances legislativos a favor de la mujer, si el acceso a la tierra con la cotitulación y si el incremento de la participación política “han significado un cambio cualitativo en las condiciones de vida y en las relaciones de dominación, de poder y subordinación en las que se encuentran las mujeres en esta sociedad colonialista, capitalista y patriarcal”.

Como se ve, la expositora procura vincular su descripción de la situación de las mujeres con rasgos estructurales del Estado y de la sociedad boliviana. De ese modo, intenta alejarse de lo que ella critica en el enfoque de género: el reduccionismo de abordar la desigualdad a partir de la diferencia sexual, sin vincularla “con otras formas de opresión y de dominación derivadas del colonialismo y el capitalismo”.

Así, sostiene que las políticas públicas tienen una limitación de inicio: persiguen la inclusión, pero sin terminar la opresión. Para superar esa debilidad, Sánchez plantea, entre otras cosas, hacer visibles las “pretéritas y actuales formas de subordinación y violencia ejercidas contra las mujeres”, con ayuda de nuevas —y heterogéneas— categorías de análisis surgidas de las recientes transformaciones rurales.

Esto “exige superar miradas unilaterales, como las que se enfocan de manera excluyente en la diversidad cultural, el género o la clase”, pues la “desigualdad sólo se puede hacer visible mirando las múltiples relaciones que la generan”.

Sugerencias varias

- Repolitización del concepto de despatriarcalización, y su aplicación concreta (Sánchez).
- Replanteamiento del desarrollo rural, actualmente orientado a la consolidación de la propiedad privada, la ampliación de la frontera agrícola y el avasallamiento de territorios indígenas (Sánchez).
- “Necesitamos un gran viraje agroalimentario”: medidas y políticas que contemplen la interconexión urbana y rural; una reforma agraria que asuma que latifundio y minifundio son parte del mismo problema; y una “revolución cultural de la cuchara” (Núñez del Prado).
- “Tareas en curso: ajustar los nuevos límites de superficie en la propiedad agraria; tratar el tema del minifundio; la extranjerización de las tierras (...) y el arrendamiento en relación al uso especulativo de la tierra” (Mallea).
- Consolidación de asentamientos humanos recientes en dos millones de hectáreas, “que podrían muy bien acompañar a las políticas de ampliación de la frontera agrícola” (Mallea).
- Debe haber debate un público sobre la Agenda Patriótica 2025 ya que tendría que ser una construcción colectiva (Castañón).
- “Para 2025 esperamos exportar 26.000 millones de dólares en alimentos de alto poder nutritivo, industrializados —chía, amaranto, tarhui y cañahua—” (Baudoin).
- “Necesitamos producir mejor, con mejores rendimientos, y esto requiere políticas públicas de estímulo, especialmente el cambio de una agricultura a secano por otra basada en el riego.” (Urioste).
- Promoción y potenciamiento de la agricultura urbana (Prudencio)
- No se puede castigar a un pueblo y menos aún, a todos los pueblos indígenas por el alquiler de tierras en TCO. La responsabilidad es individual (Vadillo).
- Hay que escuchar la voz de las organizaciones indígenas y campesinas: su percepción de lo que ocurre en el campo es más inmediata y por eso más realista (Kopp).
- “El traslado campo-ciudad no es una fatalidad, como siempre queremos verla. Es parte de un proceso, y es inútil oponerse a él” (Kopp).
- El debate sobre la seguridad y la soberanía alimentaria debe superar su excesiva agrarización; hay otros sistemas productivos como la pesca y la recolección (Humberto Gómez, FAN).
- Hay que tomar en cuenta el impacto de la ganadería dentro de la ampliación de la frontera agrícola ya que es la actividad que tala más bosques (Gómez).
- Hay que rescatar la tecnología y los conocimientos tradicionales para la producción de alimentos (Gómez).
- “Cero transgénicos” (Machaca).